

¿Hacia dónde se encaminan las luchas de los movimientos sociales?

Una reflexión crítica sobre los alcances y límites de la lucha social y popular en Guatemala¹

Simona V. Yagenova*

* Coordinadora
del Área
de Movimientos Sociales,
FLACSO Guatemala.

Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrío, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado.

18 Brumario, Karl Marx

El desvanecimiento de las esperanzas creadas durante el proceso de paz, el estancamiento de múltiples espacios de diálogo y negociación, e innumerables demandas no cumplidas, fueron algunos de los detonantes de un intenso ciclo de protesta² (Tarrow, 2004) que se inició en el año 2004 y tuvo su momento más álgido durante las jornadas de marzo y abril de 2005 en contra de la ratificación legislativa del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Este ciclo de lucha se inscribe dentro del marco de una creciente oposición mundial a las políticas neoliberales. Es síntoma de la crisis y agotamiento de la hegemonía

Yagenova, Simona V. ¿Hacia dónde se encaminan las luchas de los movimientos sociales? Una reflexión crítica sobre los alcances y límites de la lucha social y popular en Guatemala. En publicación: OSAL, Observatorio Social de América Latina, año VI, no. 19. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina: Argentina. julio. 2006 1515-3282.

Acceso al texto completo: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/norte.pdf>

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca> - biblioteca@clacso.edu.ar

neoliberal, cuyas manifestaciones más visibles son la emergencia de un nuevo ciclo de lucha de clases, y un despliegue de conflictos y protestas de los movimientos sociales en América Latina.

Las múltiples y diversas luchas sociales que se realizaron durante el año 2005 se expresan en un contexto económico, político y social en el cual los problemas estructurales, nunca abordados o resueltos democráticamente, se agudizan en el marco de la globalización neoliberal.

La persistente aplicación de políticas públicas que subordinan los intereses colectivos a los de una minoría privilegiada es un reflejo de que la estructura de oportunidad política que existía aún después de la firma de la paz para avanzar en el proceso de democratización del Estado-nación se ha ido estrechando a favor de los intereses políticos y económicos de las elites y del proyecto hegemónico de Estados Unidos.

Si bien desde los movimientos sociales en los últimos años se ha intentado ampliar el repertorio táctico de la acción colectiva para presionar desde múltiples ámbitos al Estado, las elites políticas y empresariales, no han logrado modificar sustancialmente sus prioridades imponiendo su propia agenda en desmedro de las demandas y necesidades de la población guatemalteca.

En este sentido, se está asistiendo a un escenario político marcado por la confrontación entre quienes apuestan por un modelo democrático que haga prevalecer las necesidades e intereses de las mayorías empobrecidas y quienes defienden la democracia formal y neoliberal y un modelo de sociedad basada en la diferencia y la exclusión.

La actual coyuntura ofrece oportunidades y a la vez retos para los diferentes movimientos sociales. Dentro de este contexto, a nivel de las expresiones de la sociedad civil organizada se ha instalado un proceso de reflexión, de análisis y de búsqueda de cómo dar pasos más contundentes para avanzar en el cumplimiento de las diversas y múltiples demandas, así como para defender los derechos conquistados. A su vez, se atisban signos de que el proceso de construcción de la unidad de acción está registrando algunos avances, aunque es todavía incipiente y endeble.

El difícil proceso de reconstrucción del movimiento social en un contexto de guerra y posguerra

A lo largo de los últimos veinte años de transición política los movimientos sociales han librado importantes esfuerzos y luchas, tanto en función de demandas sectoriales como

de agendas nacionales. Sin embargo, se perciben todavía significativas debilidades que no han permitido ni su crecimiento sostenido ni la construcción de una correlación de fuerzas que permitiese cambiar las prioridades de las elites a favor de las demandas sociales.

Si bien son reconocidas por los mismos actores, estas dificultades deben entenderse como una secuela directa de lo que Zavaleta denomina “la desacumulación en el seno de la clase” (Zavaleta Mercado, 1983) producto de la política represiva y contrainsurgente durante las décadas de 1970 y 1980, que implicó la desaparición física de miles de integrantes y dirigentes del movimiento popular y la pérdida de experiencias y conocimientos acumulados a lo largo de los períodos anteriores.

El proceso de reconstrucción del campo social y popular se realizó dentro de un contexto de transición política del Estado contrainsurgente a un Estado neoliberal, que hasta hoy sigue copado por los intereses de las elites económicas y fuerzas políticas conservadoras.

A los movimientos sociales les ha tocado batallar en múltiples formas: frente al Estado, al capital, y a la sociedad en su conjunto. La sociedad guatemalteca, marcada por treinta y seis años de autoritarismo, guerra, violencia, racismo y exclusión, entró al proceso de transición política debilitada en su tejido social, fragmentada y confrontada entre sí, y con enormes rezagos educativos y múltiples obstáculos para poder superar las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que se debate la mayoría de la población.

Guatemala tiene un Estado débil, históricamente cooptado por los intereses oligárquicos. Sus políticas en materia social y económica no cuentan con una proyección de largo plazo, y las políticas públicas se elaboran y reinventan acorde a las prioridades establecidas por los gobiernos de turno.

Tras la firma de la paz, se exige al Estado guatemalteco que cumpla con los compromisos plasmados en los distintos acuerdos suscriptos. Sin embargo, se trata de un Estado debilitado y en transición. Si bien es innegable que en los últimos diez años el Estado ha sufrido un proceso de transformación, este no ha obedecido a una lógica clara. Las implicaciones de ello se perciben al momento de observar que los cambios generados, de índole jurídica, política e institucional, tienen un carácter desordenado, a veces son contradictorios entre sí, y se injertan sobre un Estado débil.

La aplicación de las recetas neoliberales ha ido en detrimento de los intereses de la población y de los Acuerdos de Paz. Las privatizaciones de los bienes del Estado, los despidos masivos de los trabajadores del sector público, y las políticas sociales focalizadas o concesionadas a entidades privadas, han erosionado aun más la capacidad del Estado de responder a las múltiples demandas de la población. Se trata, en efecto, de un modelo de

Estado que, dentro del marco de la globalización neoliberal, se asigna como función principal garantizar las condiciones políticas jurídicas que permitan a las élites transnacionalizadas contar con las mejores condiciones para su proyecto de acumulación de capital. En este sentido, el modelo del Estado planteado en los Acuerdos de Paz no llegó a concretarse.

Es en tal contexto que hay que situar el análisis de la respuesta que el Estado ha dado a las demandas de los diferentes movimientos sociales a lo largo de los últimos dos años, período durante el cual un gobierno de corte empresarial ha asumido la conducción del Estado.

Las principales demandas surgidas del campo social y popular, motivo de múltiples protestas durante el año 2005

Al hacer un análisis del origen temporal de las demandas de los movimientos sociales durante el año 2005, estas pueden dividirse en: históricas; derivadas de la agenda de paz; recientes, con contenido crítico frente al capital transnacional; y coyunturales.

Si bien desde los movimientos sociales se continúa reivindicando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, sobre todo por parte del movimiento campesino e indígena, los reclamos de que estos se cumplan han decrecido notablemente en los últimos dos años. Sí se observa un auge de demandas recientes, que surgen precisamente en oposición al nuevo ciclo de expansión del capital transnacional (minería, hidroeléctricas, petróleo, etc.) y el TLC con sus secuelas de modificación del marco jurídico político a favor de las empresas transnacionales (Ley de Concesiones, megaproyectos, etc.).

Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) o comunitarias, reivindican una amplia gama de demandas que abarca lo económico, lo político, lo social y lo ambiental. La proliferación de demandas y protestas en el ámbito local es producto de la acumulación de inconformidades y los niveles de organización que la ciudadanía ha adquirido en la época de posguerra. Responde en gran medida a la indiferencia e incapacidad estatal para responder oportunamente a las múltiples necesidades no satisfechas de quienes históricamente han sufrido del abandono por parte del Estado en el ámbito rural.

A su vez, es en la esfera municipal comunitaria donde se libran actualmente las luchas políticas en contra de la apropiación de los recursos naturales por parte del capital transnacional, de manera importante en las comunidades noroccidentales donde habitan mayoritariamente los pueblos indígenas.

Cada uno de los movimientos reivindica demandas estratégicas y coyunturales. Las demandas coyunturales son múltiples y diversas. Durante el año 2005 han sido motiva-

das sobre todo por el alza en la canasta básica y el transporte público, y los altos niveles de violencia e inseguridad que golpean cotidianamente a los sectores más empobrecidos de la población. Sin embargo, son desatendidas o reiteradamente incumplidas, lo que implica enormes esfuerzos por parte de los movimientos, quienes se ven obligados a priorizar lo coyuntural en desmedro de una perspectiva estratégica a largo plazo.

En las demandas estratégicas se expresa el rechazo al modelo del capitalismo neoliberal, el patriarcado, el racismo y la discriminación étnica, la situación agraria, y la falta de democratización real del Estado. Sin embargo, estas reivindicaciones estratégicas se diluyen sectorialmente, y pierden la perspectiva integral de las múltiples dimensiones que configuran y reproducen el modelo de dominación prevaleciente.

Al hacer una caracterización de las demandas, se destaca el hecho de que muchas de ellas apuntan al fortalecimiento del Estado y/o su transformación mediante un sinfín de propuestas de creación de políticas públicas y nuevas propuestas de leyes. La fiscalización de estas políticas públicas, el presupuesto y el marco jurídico vigente, constituyen una línea de acción reciente de los movimientos sociales que ha adquirido cada vez más peso en su accionar político.

El Congreso de la República ha sido centro del cabildeo y de la protesta. Para el movimiento social, el Legislativo se convirtió en un espacio estratégico donde negociar y presionar sobre sus demandas. El hecho de no contar con una correlación de fuerzas favorable en el ámbito legislativo implicó un enorme esfuerzo, y limitaciones en términos de obtener los resultados deseados.

La poca apertura por parte del Congreso hacia los reclamos de los diferentes movimientos sociales ha desnudado nuevamente la naturaleza excluyente del sistema político, y las limitaciones existentes para que se democratice la gestión estatal. Por otro lado, ha desencadenado una serie de reflexiones en algunos sectores sobre cómo repensar el vínculo de la lucha del movimiento social con lo político y el Estado.

Tipo de protesta y acción colectiva

Las múltiples y variadas acciones colectivas tienden a ser un reflejo del nivel de organización que la sociedad civil ha adquirido en la época de posguerra. Demuestran su alto grado de heterogeneidad, sus distintos ámbitos de acción e influencia, así como las tendencias de articulación y unidad de acción en función de demandas que tienen trascendencia nacional.

El incremento de la protesta popular debe entenderse como parte de una lucha política de quienes no tienen acceso a la toma de decisiones y poseen una débil representación en las instituciones estatales. Pero a su vez, es un reflejo de una ciudadanía viva que, en medio de un contexto desfavorable, no ha abandonado sus sueños y sus demandas por una Guatemala distinta. Se trata de una ciudadanía que se toma el legítimo derecho de decir *no* a la indiferencia estatal y a las violaciones de sus más elementales derechos.

Un elemento que se observa a partir de la información recabada es que la sociedad civil guatemalteca analiza, propone y actúa de cara a los grandes problemas de índole económica, política y socio-cultural en los cuales el país está inmerso. A partir de sus demandas y protestas se aprecia un profundo anhelo por una Guatemala distinta, más justa, igualitaria y democrática. En este sentido, la protesta como expresión concreta de inconformidad, pero también de esperanza y compromiso, debe valorarse positivamente.

Las principales formas de protestas durante 2005 fueron: manifestaciones, marchas, plantones, huelgas, tomas de edificios de instituciones, toma y bloqueo de tramos carreteros, y ocupación de fincas. Desde mediados de octubre de 2004 hasta mediados de diciembre de 2005 se realizaron un total de 367 protestas en 22 departamentos y 153 municipios, incluyendo 182 manifestaciones, 97 bloqueos de carretera, 31 plantones y 20 huelgas y/o paros. Las cuestiones o demandas que provocaron una mayor cantidad de protestas fueron: Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA); minería; transporte; inseguridad y violencia; resarcimiento de las ex PAC³; tierra; trabajo; salarios; salud y educación.

El ciclo de protesta iniciado en 2004 continuó durante el primer trimestre de 2005, en el que se dan las jornadas de lucha contra el CAFTA –reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado– mientras que en el segundo semestre del año se registra un declive en el número de conflictos a nivel nacional.

En los primeros tres meses de 2006 se puede observar un nuevo repunte de diferentes acciones colectivas. Hasta finales de marzo se han contabilizado más de 63 manifestaciones y 14 bloqueos de carretera⁴.

La distribución territorial de la protesta demuestra que la mayoría se realizó en la ciudad capital, y en aquellos departamentos del país donde se registraron importantes luchas contra la ratificación del CAFTA, contra empresas transnacionales, y donde surgieron demandas para garantizar el acceso a los servicios de salud, educación, transporte y resolución de la problemática de la inseguridad ciudadana y los conflictos agrarios.

Los movimientos que tuvieron una participación destacada en las acciones de protesta y otras formas de acción colectiva fueron, en orden de importancia: organizaciones comunitarias; coordinadores intersectoriales; movimiento sindical/obrero; movimiento campesino; movimiento de secuela de guerra (ex PAC); movimiento indígena; movimiento magisterial. Como actor nuevo en el escenario político de la protesta se destacó la tercera edad, con dieciocho eventos de protesta realizados a lo largo del año.

Distintas expresiones del movimiento indígena libraron múltiples acciones de protesta en contra de aquellos proyectos del capital transnacional que amenazan directamente su sobrevivencia material y espiritual. Como producto de esa presión, a principios de 2006 lograron que se aprobara la ley del Adulto Mayor que estipula una pensión mínima para las personas de tercera edad.

Algunas reflexiones adicionales

El contexto en el que los movimientos sociales realizan sus luchas y reivindican sus demandas está signado por una estructura de oportunidad política desfavorable, sobre todo para aquellas que se oponen a los intereses del capital nacional y transnacional. Se observan de manera reiterada intentos –la mayoría de las veces infructuosos– de resolver las demandas mediante la constitución de mesas de diálogo y negociación.

Durante el año 2005, diversas organizaciones pertenecientes al movimiento campesino, sindicales, de mujeres, indígenas y de derechos humanos han expresado su descontento por los escasos resultados que estos espacios de diálogo y negociación (D/N) arrojan, y han planteado la necesidad de cambiar su estrategia frente al Estado. Según algunos movimientos sociales, la falta de voluntad política para poder arribar a acuerdos consensuados es la causa principal del desgaste en que han caído dichos espacios.

Sin embargo, la dispersión sectorial, y las dificultades para consensuar agendas comunes que permitan abordar de manera sistemática y por orden prioritario las demandas de los diferentes movimientos, otorgan suficiente campo de maniobra política a los respectivos gobiernos para dialogar de manera separada con las diferentes fuerzas sociales, fragmentar la integralidad de las demandas, neutralizar potenciales conflictos, y sobre todo imponer su propia agenda política.

La falta de respuestas concretas a las demandas ha contribuido a un incremento palpable en las protestas sociales, que en más de una ocasión fueron intervenidas violentamente por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

La criminalización de la protesta social se expresa de distintas maneras: intervención violenta de las fuerzas de seguridad en eventos de protesta o conflicto, enjuiciamiento de dirigentes sociales, allanamiento de oficinas, amenazas directas e indirectas y a través de una sistemática descalificación de líderes o lideresas sociales. La responsabilidad del Estado en estos hechos, ya sea de manera directa o por omisión, exacerba desconfianzas históricas y genera un clima poco propicio para los procesos de diálogo y negociación.

Ante el lento avance de los procesos de D/N y el limitado éxito de las protestas sociales, en diferentes expresiones organizadas de los movimientos sociales se ha instalado un proceso de reflexión y análisis que está lejos de haberse concluido.

El proceso de construcción de la unidad de acción se enfrenta a una serie de dificultades, producto en parte de la naturaleza distintiva de las organizaciones, diversidad de intereses, identidades, prácticas y experiencias organizativas. Es importante reconocer que los movimientos sociales no han escapado al impacto que ha tenido el neoliberalismo en las formas de pensar y actuar. La fragmentación social generada por este modelo se reproduce en el ámbito del campo popular y social, donde prevalecen las identidades particulares en desmedro de la construcción del sujeto popular colectivo.

Uno de los problemas fundamentales que durante este período se evidenció con mayor fuerza fue la dificultad de avanzar hacia la construcción de una visión estratégica y programática en la cual se encuentren reflejadas tanto las demandas coyunturales de la población como las demandas estructurales y estratégicas que cada una de las organizaciones integrantes de los diferentes movimientos sociales ha reivindicado a lo largo de los últimos años.

Los movimientos sociales, en el afán de democratizar la gestión estatal y poder satisfacer las demandas más sentidas de su base social, han incursionado en una dinámica de relacionamiento con el Estado que no deja de tener sus dilemas y contradicciones; sobretodo, cuando estas demandas son refuncionalizadas y reapropiados por las elites en el poder, con el afán de legitimar su modelo de dominación.

En el aspecto ideológico-político, es posible detectar debilidades que han tenido importantes implicaciones: debilidades en el contenido político de las propuestas y en el proceso de negociación con el Estado; la imposibilidad de trascender desde lo coyuntural hacia lo estratégico; y un creciente riesgo de cooptación por parte del Estado o las elites de cuadros provenientes del movimiento social.

Se detectan importantes avances en cuanto a la organización de la ciudadanía en torno a necesidades inmediatas, que da cuenta de la proliferación de múltiples expresiones

organizativas de la sociedad civil. No obstante, esta multiplicidad de esfuerzos se dispara en distintas direcciones, está desvinculada de las luchas de los movimientos sociales en el ámbito nacional y no logra confluir en una direccionalidad que permita un proceso de acumulación de fuerzas.

Las últimas movilizaciones contra el TLC mostraron debilidades en el trabajo organizativo de las expresiones más beligerantes de los movimientos sociales. Esto debe desembocar en una reflexión acerca de cómo se concibe hoy la estrategia organizativa en el marco de una sociedad que ha sufrido enormes cambios en múltiples planos, y que ha acumulado insatisfacción y frustración respecto del modelo vigente. Cómo profundizar el trabajo organizativo, y cómo tender puentes con la ciudadanía no organizada para motivarla a involucrarse en el proceso de organización, constituyen dos de los retos importantes para el movimiento social de hoy.

Otro de los desafíos que enfrentan los movimientos sociales es avanzar en la construcción y consolidación de alianzas estratégicas, sobre todo partiendo de que ninguno de ellos puede por sí solo avanzar en la concreción de sus demandas, y mucho menos en la transformación del Estado. Cada uno de los movimientos sociales tiene una diversidad de experiencias de lucha y conocimientos acumulada⁵, y el intercambio de esta *praxis acumulada* se vuelve imprescindible para avanzar en el proceso de su fortalecimiento. En el ámbito de las alianzas⁶, es necesario pensar en la construcción de nuevas formas de conducción colectiva, un nuevo modo de articulación de los actores desde una perspectiva horizontal y plural, y nuevas formas de dirección y de representación.

La situación actual ofrece importantes oportunidades para revisar las concepciones, las prácticas y las estrategias, y poder situar con mayor claridad los múltiples factores que impiden el fortalecimiento de los diferentes movimientos y expresiones sociales. El año 2005 fue en tal sentido de particular importancia: permitió visualizar con mayor claridad las debilidades, fortalezas y retos de aquellas fuerzas sociales y políticas comprometidos con la construcción de una sociedad más democrática e incluyente.

Bibliografía

Zavaleta Mercado, René (comp.) 1983 *Bolivia, Hoy* (México: Siglo XXI).

Tarrow, Sydney 2004 *Poder en Movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza).

Yagenova, Simona Violetta 2006 *La protesta social 2005* (Guatemala: FLACSO).

Notas

1 El presente artículo es una versión reducida del texto original, el mismo puede consultarse en formato completo en la sección debates de la página web del OSAL <<http://osal.clacso.org>> o <<http://www.clacso.org>>.

2 Sydney Tarrow denomina "ciclo de acción colectiva" a una fase en la que se intensifican los conflictos y la confrontación del sistema social. Se trata de una difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados, un período de tiempo en el cual se sucede una secuencia de interacción intensa entre "disidentes" y autoridades (Tarrow, 2004).

3 Los Expatrulleros son población campesina, rural, la mayoría indígena y empobrecida, que durante la época de la guerra se instrumentalizó para ejercer un control contrainsurgente sobre sus comunidades. Muchos han sido acusados de haber participado en masacres y violaciones masivas de los derechos humanos. Comenzaron a organizarse después de la firma de la paz en función de demandas de resarcimiento por sus servicios prestados durante la guerra.

4 A comienzos de 2006, el tema del CAFTA volvió a motivar numerosas acciones colectivas y protestas. Diversas organizaciones interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, aduciendo que la ratificación del CAFTA había violado la Constitución. Este recurso está en proceso de análisis por parte de la Corte, iniciándose el 10 de mayo de 2006 la primera vista pública sobre el caso, lo que motivó a diversas organizaciones a celebrar una vigilia durante ese día.

5 A nivel de las diferentes organizaciones integrantes del movimiento de mujeres, indígenas, campesinos y sindical, todavía tienen un gran peso las identidades particulares, y existen serias dificultades para consensuar agendas y compartir experiencias comunes. El movimiento de mujeres ha expresado en diversas oportunidades su inconformidad porque sus demandas más urgentes no son tomadas en cuenta por los otros movimientos, y está en un proceso de reflexión sobre cómo conjugar sus propias demandas con las que tienen connotaciones de carácter coyuntural y estratégico.

6 Durante el periodo 2004-2005 surgieron diferentes instancias de Unidad de Acción intersectorial. El 12 de octubre de 2004 se formó el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular, que jugó un papel importante durante las jornadas de lucha contra el CAFTA en marzo y abril de 2005. El Frente Nacional de Lucha (FNL) constituye otra instancia de unidad de acción cuyo perfil público ha crecido durante los últimos meses. Persisten serias dificultades por parte de las organizaciones para construir una estrategia de unidad de acción que perdure en el tiempo. Pareciera asistirse a un momento de búsqueda y realineación de fuerzas, pero basado más en la identificación con determinados liderazgos que en una visión estratégica de largo aliento.